xlsemanal

ABC

Nº 946. DEL 11 AL 17
DE DICIEMBRE DE 2005
www.xlsemanal.com

Fin de semana entre copas: las mejores rutas del vino español

"Feminicidio EN GUATEMALA

DOS MUJERES SON ASESINADAS CADA DÍA. ¿QUÉ TRAMA SE ESCONDE TRAS LA IMPUNIDAD DE ESTOS CRÍMENES?

Polémica

¿Por qué desde hace veinte años la industria no ha inventado una sola vacuna?

Entrevista

Sánchez Piñol, un antropólogo en la corte de los 'best-sellers'

¿Será ella la próxi

na?

EN GUATEMALA ser mujer y víctima es la misma cosa. El pasado año hubo 527 asesinadas, muchas de ellas niñas, y sólo un caso llegó a los tribunales. La ley está invariablemente al lado de los culpables. Una periodista británica investiga este 'feminicidio', mucho más cruel e ignorado que el de Ciudad Juárez.

Por **Christine Toomey** Fotografía de **Carols Reyes-Manzo**

Los rostros del dolor

Existe un país donde un hombre puede librarse de una condena de violación si se casa con la víctima, siempre que ésta sea mayor de 12 años. Allí, el sexo con menores sólo es delito si la niña puede demostrar que no fue ella quien provocó. En Guatemala, para que una mujer maltratada pueda llevar a los tribunales a su marido, las heridas han de permanecer visibles al menos diez días. En algunas comunidades, incluso, es normal que los padres 'inicien' a sus hijas en el sexo.

Atada con alambre de espinos, espantosamente mutilada, con insultos grabados sobre la piel, violada, asesinada, decapitada y tirada en un arcén; en la capital del país es raro el día en que no se encuentra una mujer en estas condiciones. Este año, la media ha sido de dos cuerpos al día: 312 hasta mayo, que se suman a las 1.500 violadas, torturadas y asesinadas en los últimos cuatro. Queda claro que, en Guatemala, ser mujer y víctima es una misma cosa.

En la cola de un organismo de Derechos Humanos, Catalina Macario espera para hablar con alguien que la pueda ayudar. Quiere saber si es posible enjuiciar a quienes atacaron a su «niña». Hilda tenía 12 años cuando fue destripada con un machete por resistirse a una violación. Sobrevivió, pero fue rechazada y estigmatizada por su comunidad. A su lado, María Alma de Villatoro habla de Priscilla, su hija de 21 años muerta a cuchilladas a manos de su novio por negarse a abortar.

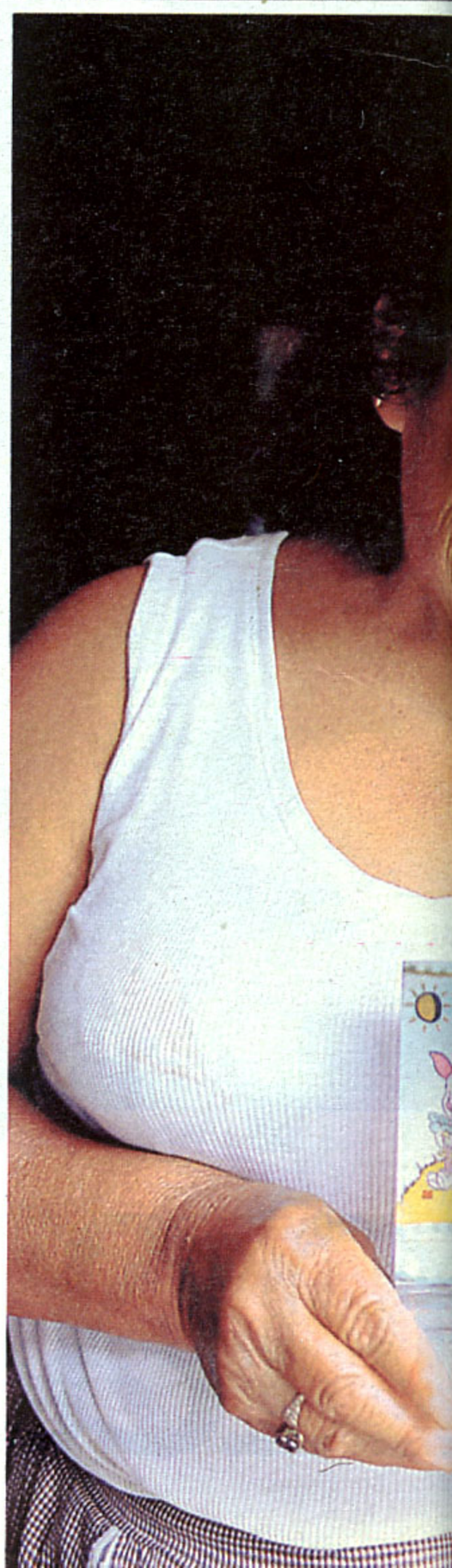
Los periódicos llevan la cuenta de los cadáveres, aunque la noticia suele reducirse a un párrafo al pie de una página interior. En ocasiones se menciona que la mujer fue encontrada sin cabellera y atada con alambre de espino, abandonada en un descampado o, como suele ocurrir, dentro de un bidón de gasolina vacío. También se indica que sobre la piel se encontraron grabadas las palabras «Muerte a las putas», y raramente se dice si la mujer o la chica (a veces de apenas ocho o nueve años) fue violada, como ocurre en casi todos los casos, según afirma Mario Guerra, director del depósito de cadáveres de Ciudad de Gua-

Relato de la impunidad

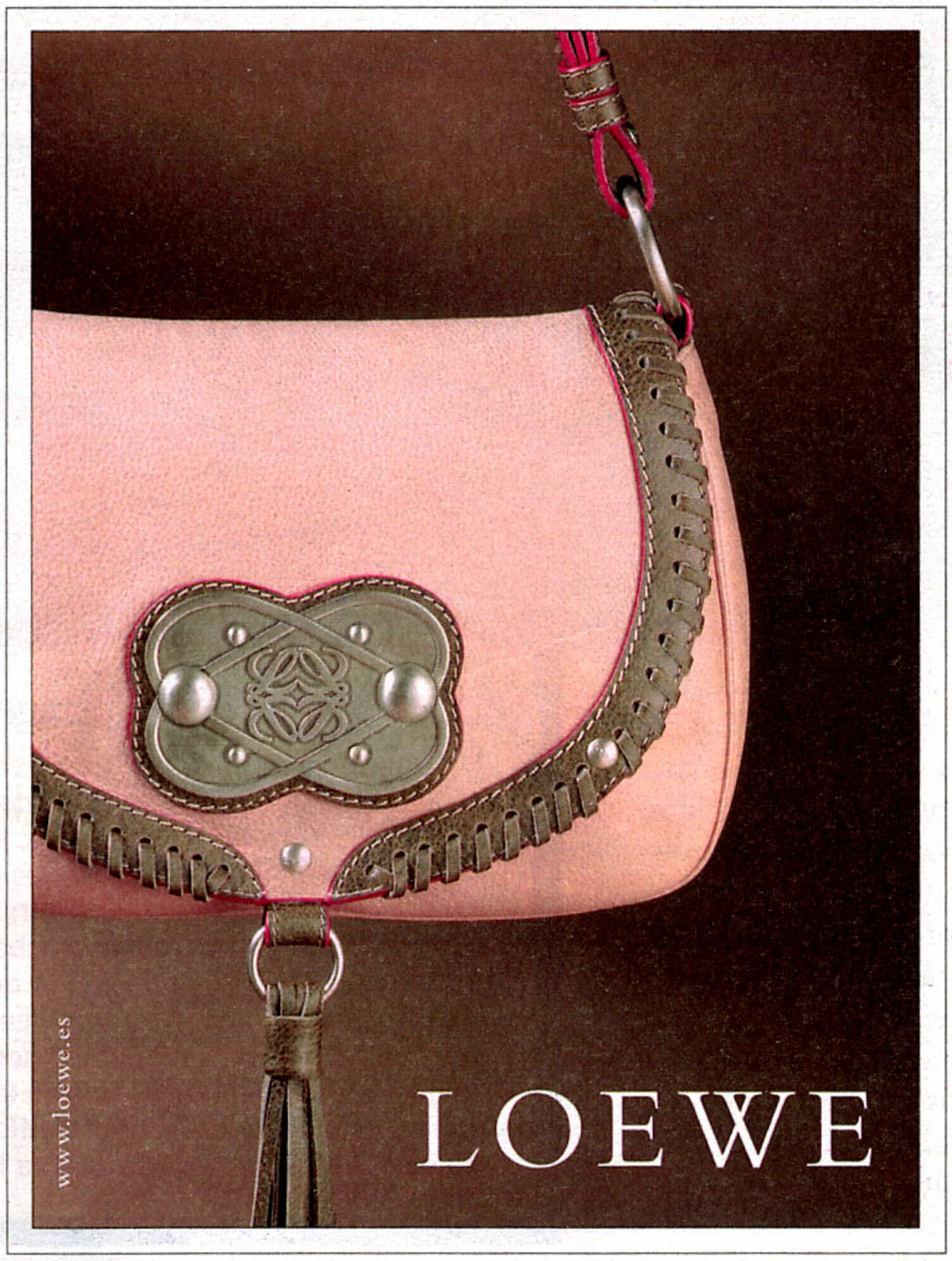
Rosa Franco lleva cuatro años luchando para que se investigue el asesinato de su hija adolescente María Isabel. Una noche, en las noticias, Rosa reconoció el cuerpo de su pequeña, boca abajo, en un descampado. Rosa presionó a la Policía para que buscara al asesino, les entregó pruebas que demostraban que su móvil había sido usado tras la muerte y siguió la pista de testigos que narraron cómo la habían tirado de un coche. Las autoridades la acusaron de entrometerse y declararon en público que su hija era prostituta.

Lágrimas de una abuela

Manuela Sachaz tenía 19 años y cuidaba de un bebé de diez meses. Su cuerpo apareció sobre un charco de sangre. Violada y mutilada; sus pechos y labios, amputados; las piernas, agujereadas por navajazos. El bebé, sentado en la trona, tenía el desayuno delante. Los dos habían sido decapitados. Aferrada a una foto de su nieto, hablando entre lágrimas, Cervelia Roldán señala a un vecino policía «que solía molestar a Manuela» y que desapareció después del doble asesinato. Las autoridades no han puesto mucho interés en investigar.



Desde el fin de la guerra civil, las redes del crimen organizado se han infiltrado en el Gobierno, el Ejército y la Policía



temala. Las familias pueden tardar meses en dar con ellas, ya que aparecen lejos del lugar del secuestro. A muchas se las designa «XX» o «identidad desconocida»; sus rostros están irreconocibles y acaban incineradas en fosas comunes.

Para entender la situación hay que remontarse a los años 50, cuando amplias zonas de Guatemala estaban en manos de la United Fruit Company. En 1954, el gobierno de izquierdas elegido democráticamente expropió terrenos de la multinacional en el marco de la reforma agraria, y la CIA, cuyo director estaba ligado a la compañía, orquestó un golpe militar. Se paralizó la redistribución de tierras, surgieron grupos guerrilleros y comenzó la campaña antiinsurgencia patrocinada por EE.UU. El ciclo de represión, recrudecido en los 80, durante la era Reagan, fue el más violento y desconocido de América Latina.

Con la Guerra Fría de fondo, los sucesivos gobiernos de Washington inyectaron ayuda militar a Guatemala y a grupos de ultraderecha para proteger sus intereses en la región. Se asolaron grandes extensiones de cultivos, masacrando a la población, indios mayas en su mayoría. Los habitantes de las zonas beligerantes eran llevados en manada a las iglesias y quemados vivos; se encerraba a familias enteras dentro de un pozo. Los oponentes políticos eran eliminados y las mujeres, violadas, mutiladas y asesinadas. A las embarazadas las abrían el útero y colgaban los fetos de un árbol. En 1996, cuando la ONU negoció un acuerdo de paz, se contaban más de 200.000 muertos, 40.000 desaparecidos y 1,3 millones de guatemaltecos convertidos en refugiados internos, en un país de poco más de diez millones de habitantes.

Cuando la Iglesia católica denunció en 1998 que el 93 por ciento de los muertos de la interminable guerra civil había fallecido (en lo que más tarde se reconocería como «actos de genocidio») a manos de las Fuerzas Armadas, los escuadrones de la muerte paramilitares y la Policía, el obispo que redactó el informe fue asesinado en la puerta de su casa. Extraordinariamente, dado el clima de impunidad que se vive en el país, tres oficiales fueron condenados por el homicidio.

Como reconocimiento de que los responsables de la mayor parte de las atrocidades fueron los sectores armados por EE.UU., entrenados con métodos sádicos de represión, el acuerdo de paz apoyado por la ONU exigió la reducción y reforma de las Fuerzas Arma- ▶

[Violencia cotidiana]

1 2
3

+ Escenas de una tragedia nacional

[1.] La Policía registra a un grupo de pandilleros en uno de los barrios marginales de Ciudad de Guatemala. A jóvenes como éstos, integrantes de las maras (pandillas) locales, se los acusa de asesinar a mujeres y los agentes disparan indiscriminadamente sobre ellos. No hay pruebas, pero la estrategia goza de aceptación, ya que sirve para 'limpiar' las calles de estos imberbes delincuentes. [2.] Muchas mujeres asesinadas son arrojadas en bidones así. Las tres velas honran la memoria de una de las víctimas. [3.] Una manifestación organizada por la Red de Mujeres Contra la Violencia.

das y la Policía. Pero mientras se reducían ambas instituciones, los hombres seguían siendo los mismos. Los responsables de las peores atrocidades continuaron impunes. Efraín Ríos Montt, el general acusado de actos de genocidio en la cumbre de la guerra (cuyos cargos desestimó el ex presidente estadounidense Ronald Reagan como «acusaciones falsas»), consiguió ser elegido presidente del Congreso.

En un país que ha sido testigo de tantas atrocidades sin ley, no sorprende que la vida no valga nada. Y en una tierra con una cultura machista tan pronunciada, no extraña que los hombres se hayan acostumbrado a pensar que pueden asesinar, torturar y violar a las mujeres y quedar impunes.

Es asombrosa la rapidez con la que aceptó verme el jefe Méndez, responsable de una unidad policial especial creada el año pasado para investigar asesinatos de mujeres. Teniendo en cuenta el número de crímenes, podríamos pensar que es un hombre ocupado, pero en su oficina no hay mucho que hacer. De cuatro ordenadores, sólo dos están encendidos. Aparte de Méndez y su secretaria, hay tres agentes más en la habitación. Están sentados en corrillo, hablando y riéndose durante mi visita.

Para Méndez, la raíz de esta violencia hacia el género femenino es sencilla: «Las mujeres ahora salen más de casa y empiezan a participar en todos los aspectos de la sociedad. Muchos hombres las odian por ello. Éste es un país con muchos machistas», sentencia. Detrás del jefe de Policía, su joven secretaria, embutida en un ceñidísimo uniforme, le acaricia el pelo mientras habla.

Méndez atribuye el clima generalizado de violencia al florecimiento del tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales y las luchas internas despiadadas entre bandas callejeras rivales, las maras. En un país con al menos 1,5 millones de armas sin registrar, y que el año pasado se calcula que importó 84 millones de balas y cartuchos, sin duda esto es parte del pro-

redes del crimen organizado. «Un elemento clave en la historia de Guatemala es el uso de la violencia contra las mujeres para aterrorizar a la población», explica Eda Gaviola, directora del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh). «Este estado de terror beneficia a todo tipo de criminales, desde el narcotráfico hasta las adopciones ilegales, pasando por el blanqueo de dinero y los secuestros. Hay signos claros de conexión entre estas actividades y el Ejército, la Policía y las empresas de seguridad privada, a las que se incorporaron ex militares y ex policías tras la reducción de las fuerzas del orden.»

Hace tres años, Amnistía Internacional describía Guatemala como un «Estado mafioso corporativo» controlado por «poderes ocultos» que forman una «alianza entre sectores de la oligarquía, empresarios, Policía, Ejército y los delincuentes comunes». A lo que Hilda Morales, una abogada que lidera una red de grupos femeninos constituidos a medida que escalaba el problema, añade: «Ni la Policía ni el Gobierno se lo toman en serio». En su opinión, la situación no cambiará a menos que se presione desde el exterior y que los inversores conozcan la situación y cuestionen sus negocios con Guatemala.

No olvidemos que éste es un país pequeño, condenado geográficamente a una relativa oscuridad. En el vecino México, en Ciudad Juárez, en la frontera con EE.UU., las más de 400 mujeres asesinadas en la última década han atraído la atención de todo el mundo. Estrellas de cine como Jane Fonda, Sally Field o Jennifer López han puesto su rostro para subrayar y denunciar lo que se ha dado en llamar 'feminicidio'. Pero pocos hacen caso de lo que pasa en Guatemala.

El intento por parte de la ONU de establecer una comisión para investigar y enjuiciar a los «poderes ocultos» del país fue desestimado por las autoridades locales por «inconstitucional». Mientras siguen las conversaciones, también continúan los asesinatos.

«Aquí, las mujeres mueren peor que los animales. Cuando el Ayuntamiento anunció una campaña para exterminar a los perros callejeros, la gente paralizó las calles para protestar —comenta Andrea Barrios, del Caldh—. Cuando se asesina a una mujer, la indiferencia es total. Se ha creado la imagen de que las que mueren se lo merecen de un modo u otro.»

La Policía, de hecho, afirma públicamente que las víctimas son, en su mayoría, prostitutas. Es parte de una estrategia para intimidar a las familias que presionan para que se investiguen las muertes. En realidad, más del 40 por ciento de las asesinadas era ama de casa y un 25 por ciento, estudiantes. Sin dejarse amedrentar por esta estrategia, Rosa Franco, madre de una adolescente asesinada brutalmente hace cuatro años, no ha parado de exigir justicia. Siguen a sus hijos de camino al colegio. A poca distancia de la

Se ha difundido la idea de que las muertas se lo merecían, por prostitutas. Pero la mayoría eran estudiantes y amas de casa

casa, un coche con varios ocupantes en su interior vigila por turnos. Hay uno la noche que hablo con ella en su casa. Para los defensores de los Derechos Humanos, este tipo de vigilancia es una señal de que el asesinato está relacionado con la burocracia y el crimen organizado. «Tengo miedo —confiesa Rosa—. Pero me he jurado no dejar de luchar.»

El mismo sentimiento lo comparten María Elena y Liliana Peralta. Su hermana mayor, Nancy, fue asesinada en 2002. Cuando las hermanas y sus padres denunciaron que la estudiante de Contabilidad de 30 años no había vuelto a casa un día, la Policía les dijo que esperaran a ver si aparecía. Al día siguiente, el cuerpo desfigurado de una joven fue encontrado a las afueras de la capital. El padre llamó al depósito, donde le dijeron que no podía ser su hija porque la descripción no coincidía. Junto al cuerpo, sin embargo, había aparecido una de las prendas que Nancy llevaba al salir de casa.

«La Policía se ríe de nosotras, a mi hermana le dicen 'la muerta viviente'. Insisten en que no ha muerto, que otra estudiante se había apropiado de su identidad para inscribirse en la Universidad. No quieren investigar», afirma María Elena, quien ha empezado a estudiar Derecho para llevar ante la justicia a los asesinos de su hermana.

Rosa Franco y la familia Peralta denuncian que incluso las pruebas forenses más básicas, como la de fluidos corporales, que pueden ayudar a identificar a los asesinos en ambos casos, no se llevaron a cabo. Ante las constantes frustraciones, piensa llevar sus casos a la Comisión Interamericana. Sin embargo, la mayoría de las familias de las víctimas no tiene recursos ni conocimientos como para iniciar una lucha legal.

Alejados del caos de Ciudad de Guatemala, en la selva al norte del país, rica en vestigios de la civilización maya, un grupo de arqueólogos encontró recientemente en una cripta la escena de un crimen antiguo: había restos de dos mujeres, una de ellas embarazada, dispuestos en forma ritual. Al parecer, era el resultado de una demostración de fuerza entre ciudades rivales. 1.500 años después, sus descendientes siguen siendo víctimas de las luchas por el poder. ■

© THE SUNDAY TIMES MAGAZINE